



DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLÍN
TRIBUNAL SUPERIOR SALA CUARTA DE DECISIÓN CIVIL
MAGISTRADA PONENTE: PIEDAD CECILIA VÉLEZ GAVIRIA
"Al servicio de la justicia
y de la paz social"

S - 31

Procedimiento: Verbal

Demandante: Emilia Jiménez Durango y/o

Demandados: Cootraur y/o

Radicado Único Nacional: 05001 31 03 008 2019 00158 01

Procedencia: Juzgado Octavo Civil del Circuito de Oralidad de Medellín

Decisión: Revoca providencia apelada

Medellín, trece (13) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

Cuestión: Se resuelve el recurso de apelación interpuesto por Zurich Colombia Seguros S.A (antes QBE Seguros S.A), en contra de la sentencia proferida el 24 de noviembre de 2022, por el Juzgado Octavo Civil del Circuito de Oralidad de Medellín.

Temas: Responsabilidad civil extracontractual en ejercicio de actividades peligrosas, hecho exclusiva de la víctima, hecho exclusivo de un tercero.

ANTECEDENTES

Procedente del Juzgado Octavo Civil del Circuito de Oralidad de Medellín, por virtud de la apelación interpuesta por **Zurich Colombia Seguros S.A** (antes QBE Seguros S.A, en adelante Zurich) en contra de la sentencia proferida el 24 de noviembre de 2022, ha llegado a esta Corporación el proceso verbal promovido por Emilia Jiménez Durango y Deisy Andrea Holguín Jiménez en nombre propio y en representación de su hija Hellen Mariana Giraldo Holguín,

en contra de **la apelante**, Doriela Jaramillo Espinosa (en adelante la propietaria), Oscar Leonardo Zapata Tavera (en adelante el conductor del TRM-672 o simplemente TRM) Sociedad Transportadora de Urabá S.A – SOTRAURABÁ- (en adelante la afiliadora o la empresa), AIG Seguros Colombia S.A (en adelante AIG), Cooperativa Multiactiva de Transportes de Urrao - COOTRAUR- (en adelante la Cooperativa), Robinson Alonso Ramírez Jiménez (en adelante el conductor VLI-089 o simplemente VLI).

PRETENSIONES:

"Que los demandados sean declarados civilmente responsables de los daños a la vida de relación, morales, daño emergente y lucro cesante surgidos a raíz del evento acontecido el día 22 de enero de 2017, cuando el vehículo tipo bus de servicio público de placa TRM 672 atropelló y ocasionó la muerte del señor Pedro José Holguín Durando (sic fl 3 pdf 02)

Lo anterior, para que los demandados sean condenados a pagar las siguientes sumas de dinero:

A favor de Emilia Jiménez Durango y Deisy Andrea Holguín Jiménez:

- **Lucro cesante consolidado y futuro.** \$18.579.619,37 y \$77.921.721,71 respectivamente.

- **Perjuicios morales:** 100 SMLMV para cada una.

A favor de Hellen Mariana Giraldo Holguín:

- **Perjuicios morales:** 100 SMLMV.

Todo lo antedicho, con fundamento en hechos que así se compendian:

Que

"el día 22 de enero de 2017 el señor Pedro José Holguín Durango de 78 años de edad, comerciante de profesión con asiento principal en el

municipio de Caicedo – Antioquia -, se desplazaba en calidad de pasajero en el vehículo tipo bus de transporte público ... de placas VLI 089, afiliado a la empresa ... COOTRAUR conducido por el señor Robinson Alonso Ramírez Jiménez, el cual, de manera imprudente detuvo el vehículo en zona prohibida en mitad de la vía pública, lugar NO autorizado ni apropiado para hacerlo, exponiendo a los pasajeros al peligro de un probable atropellamiento al momento del cruce de la calzada para dirigirse al parador Rancho Alegre ubicado frente a la calzada de la vía Medellín – San Jerónimo, KM 18; situación antes descrita que se evidencia en el ... IPAT, igual que en el informe pericial elaborado por perito idóneo”, (sic hecho primero demanda fl 6 pdf 02).

Que el señor Holguín Durango (QEPD) descendió del vehículo porque así lo quiso su conductor, y en el sitio fue atropellado por otro vehículo de transporte público de placas TRM 672 conducido por el señor Oscar Leonardo Zapata Tavera, sufriendo así varias lesiones por mecanismo contundente que desencadenaron un shock traumático y finalmente la muerte en la escena de los hechos, lo cual deja en evidencia la alta velocidad a la que se desplazaba el conductor que lo embistió.

Que el exceso de velocidad en mención quedó acreditado en el respectivo informe policial y en el dictamen pericial aportado con la demanda, en los cuales se describe que el conductor del vehículo TRM 672 se desplazaba a tal exceso que pudo perder su agudeza visual y sus capacidades neurofísicas, pues a pesar de transitar por una vía conocida, que lo llevó a proceder con exceso de confianza, no realizó maniobra alguna para evitar la ocurrencia del suceso.

Que la ocurrencia del accidente le es atribuible a los conductores de los dos rodantes, pues el señor Robinson Alonso dejó a sus pasajeros en un lugar prohibido y peligroso para cruzar, mientras que el señor Oscar Leonardo atropelló a la víctima directa debido a que el exceso de velocidad le impidió maniobrar, tal como lo concluyó el perito que realizó el experticio aportado con la demanda, y muy a pesar de lo cual se abstuvieron de responder por los perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales causados a los demandantes, incluso oponiéndose a toda posibilidad de conciliación.

RÉPLICA

La demanda fue admitida por auto fechado el 26 de abril de 2019 (fl 189 pdf 02) y, aclarando que en la audiencia inicial se llevó a cabo una conciliación parcial por virtud de la cual terminó el proceso en contra de Doriela Jaramillo Espinosa, Oscar Leonardo Zapata Tavera, SOTRAURABA, AIG Seguros Colombia S.A. (hoy SBS Seguros Colombia S.A.), los demandados aún involucrados en este litigio procedieron a contestarla de la siguiente manera:

Zurich (fls 302 y siguientes pdf 02)

Comenzó por indicar que no le constaba la actividad laboral que supuestamente desempeñaba el señor Pedro José Holguín, y aunque no negó que este se desplazaba como pasajero del vehículo de placas VLI-089, fue enfática en señalar que el conductor del bus se detuvo cerca de la berma para permitir el descenso del mentado pasajero. Por tanto, alegó que faltaban los demandantes a la verdad cuando afirmaron que el señor Robinson se estacionó en la mitad de la vía, razón esa por la que quedaba suficientemente clara la causa de muerte del familiar de los hoy demandantes: el atropellamiento por parte de quien pilotaba el vehículo de placas TRM-672 (fl. 2-3 pdf 2.1)

Por lo demás, aseguró que los hechos narrados en la demanda eran más bien consideraciones subjetivas de las que, en cualquier caso, se desprendía una confesión con respecto a la ruptura del nexo causal por concurrir el hecho exclusivo de un tercero. Es más, en su defensa propuso las que llamó “excepciones” de “causa extraña – hecho exclusivo de la víctima -”, “hecho de un tercero”, “conurrencia de causas reducción de la indemnización”, “inexistencia de los perjuicios y estimación exagerada de los mismos”, “inexistencia de solidaridad entre ZLS y los presuntos responsables”, “valor asegurado” y “límite de la indemnización”.

- **Cootraur y Robinson Alonso Ramírez Jiménez** fueron notificados por aviso (fl 566 pdf 02), pero no realizaron pronunciamiento alguno.

SENTENCIA IMPUGNADA

Trabada la relación procesal, se dictó la sentencia que puso fin a la primera instancia en la que se resolvió lo siguiente:

"PRIMERO: Se acogen parcialmente las pretensiones.

SEGUNDO: Se declara que la codemandada ZLS ASEGURADORA DE COLOMBIA S.A., la COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRANSPORTES DE URRAO COOTRAUR, y el señor ROBINSON ALONSO RAMÍREZ JIMÉNEZ 1048016485, son responsables civilmente de los perjuicios morales padecidos por los demandantes, con ocasión de la muerte de su cónyuge, padre y abuelo Pedro José Holguín Durango en enero 22 de 2017, en las condiciones reseñadas en la demanda.

TERCERO: En consecuencia se les condena a pagar por perjuicios morales las siguientes sumas, realizada ya la reducción mencionada: Para la señora EMILIA JIMÉNEZ DURANGO con cédula 21593884 el equivalente a TREINTA Y SEIS (36) salarios mínimos legales mensuales vigentes; para la señora DEISY ANDREA HOLGUIN JIMÉNEZ con cédula 1020393421 la suma de TREINTA Y SEIS (36) salarios mínimos legales mensuales vigentes; y para la menor HELLEN MARIANA GIRALDO HOLGUÍN la suma de DOCE (12) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Con lo anterior se reconoce la excepción de la reducción de la indemnización, prevista en el artículo 2357 del CC, sin que haya lugar a reconocimiento de las demás excepciones, como fueron la culpa exclusiva de la víctima y la culpa exclusiva de un tercero; también se atiende la manifestación, a manera de excepción de los topes máximos que tiene establecidos la Corte Suprema de Justicia para los montos por la cuantía de la indemnización por perjuicios morales.

CUARTO: No hay lugar a acoger las demás pretensiones de perjuicios inmateriales de daño a la vida de relación, ni lucro cesante.

QUINTO: No hay lugar a acceder a la petición de rebajar lo que la parte demandante acordó y recibió en razón a la conciliación realizada con los demás codemandados.

SEXTO: Se condena parcialmente en costas, de conformidad con lo previsto el artículo 365 numeral 5 del CGP, en cuanto a condena parcial se refiere, dado que ha habido un acogimiento parcial de las pretensiones; la condena queda fijada en \$3.000.000 en contra de los codemandados y a favor de la parte demandante”.

Para decidir de la manera como lo hizo, el juzgador comenzó asegurando que se encontraban reunidos los presupuestos procesales, dicho lo cual procedió con un recuento fáctico de la demanda y su contestación, así como del trámite del proceso.

Procedió a decir que la discusión en este caso está centrada en el marco general de la responsabilidad civil, por lo que procedía establecer si se mantenía la presunción en cabeza del demandado, por tratarse de una responsabilidad que deviene del ejercicio de una actividad peligrosa, sea contractual o extracontractual, pues en todo caso el nexo causal sólo se rompe por causa extraña, sin perjuicio de la reducción de la indemnización.

Realizó, entonces, algunas consideraciones sobre el régimen de responsabilidad civil extracontractual por actividades peligrosas derivado del precepto contenido en el artículo 2356 del Código Civil, para de inmediato mencionar también que el contrato de transporte encarna una obligación de resultado, pues la víctima debía ser llevada sana y salva a cierto lugar y ello no ocurrió, pues *"se quedaron en un estadero para que las personas hicieran sus necesidades o compraran alguna cosa"*.

Añadió que el accidente de tránsito ocurrió cuando el fallecido se desplazaba en el vehículo de transporte público de placas VLI, cuyo conductor decidió aparcar al lado derecho de la vía, no en la mitad, como se dijo en la demanda. En ese punto, dijo, no se podía cruzar y por eso se incumplió esa obligación de transportar sano y salvo, puesto que esta no se desvanece por esas paradas temporales.

Pasó a referirse a la culpa exclusiva de la víctima, diciendo de entrada que no estaba acreditada y justificó el punto a través de la aplicación de las reglas definidas por la Corte Suprema de Justicia, en tanto que según el IPAT y el croquis, incluso lo manifestado en la resolución del tránsito, en la vía San Jerónimo - Medellín generalmente hay un alto flujo vehicular, muy a pesar de lo cual el conductor TRM alcanzó ver a unas niñas y detrás de ellas al señor Pedro José, a quien no pudo evitar impactar. *"Ese escenario nos va mostrando como tres concurrencias causales"*, dijo el Juez, para explicar que tres causas fueron las que se conjuraron para que ocurriera el resultado final. Profundizó al respecto argumentando lo siguiente: i) el conductor de COOTRAUR cuando a esa hora y en esas condiciones parqueó su vehículo sin percatarse que no era seguro; ii) la imprudencia del señor Pedro José que recién despertaba y sin precaución cruzó; y iii) la velocidad a la que se desplazaba el conductor de Sotaurabá. En conclusión, la víctima y los dos conductores contribuyeron a la causación del resultado.

Luego, el Juzgador insistió en que no se estructuró la culpa exclusiva de la víctima porque en un criterio lógico, legal y de experiencia, es claro que si el conductor VLI no hubiera estacionado en un sitio inseguro el resultado sería otro, pero si el señor Pedro hubiera tomado precauciones y conductor del TRM hubiera frenado o disminuido la velocidad, tampoco se estaría ante este suceso. Por tanto, el Juez anunció que haría una reducción de la indemnización, de conformidad con el artículo 2357 del C.C, equivalente al 40%.

Dicho lo anterior, entró en el campo de los perjuicios inmateriales y simplemente dijo que concedería 60 SMLMV para la cónyuge y la hija del fallecido, mientras que para la nieta la indemnización sería de 20 SMLMV, sumas todas sujetas a la respectiva reducción.

Finalmente, el *a-quo* negó el lucro cesante aduciendo que el señor Pedro José era una persona de 78 años y no se probó ingreso o actividad alguna, mucho menos que con el producto económico ayudara a su familia.

IMPUGNACIÓN

Inconforme con la decisión, Zurich se alzó en su contra alegando como reparos concretos los que pasan a individualizarse (**en la audiencia**).

PRIMERO: *"no haber tenido por acreditado el hecho exclusivo de la víctima y el hecho exclusivo de un tercero"*

SEGUNDO: *"haber realizado una disminución de sólo el 40% de la condena, teniendo en cuenta lo probado en el proceso".*

TERCERO: *"haber indexado el valor asegurado no teniendo en cuenta ... que está expresado en salarios mínimos de la fecha del siniestro, esto es, de 2017".*

CUARTO: *"haber declarado a Zurich como responsable solidario, dejando a un lado el contrato de seguro, que es lo que obligaba a Zurich, pues esta no participó como tal en los hechos".*

QUINTO: *"no haber tenido en cuenta lo pagado por otras personas, en especial lo pagado en la conciliación".*

SEXTO: *"no haber aplicado lo dispuesto en la póliza frente a los límites de la indemnización".*

DE LA SUSTENTACIÓN EN ESTA INSTANCIA (LEY 2213)

El recurso de apelación fue admitido mediante auto fechado el 5 de diciembre de 2022 (notificado por estados del 7 de diciembre siguiente). Dentro del término a que se refiere el artículo 12 de la ley 2213, se allegó memorial radicado el 16 de diciembre para sustentar la alzada, con constancia sobre el efectivo agotamiento del trámite previsto en el parágrafo del artículo 9º de la ley *ibídem*.

En esta oportunidad la apelante reprochó que el Juez no tuviera en cuenta la diferencia entre la causalidad material y la jurídica, pues *"para que haya responsabilidad civil, no basta que se verifique la causalidad fáctica, se hace necesario demostrar que aquella conducta se constituye en la causa eficiente del resultado que se pretende endilgar"* (fl 3 pdf 06 segunda instancia). Lo

anterior, sin dejar de reconocer que en algún momento la jurisprudencia acudió al criterio de “mera causalidad” o de “causa efecto”, pero aclarando que

"con el paso del tiempo, la jurisprudencia entendió que todo hecho es consecuencia de una o más causas, de modo que, pueden concurrir más de una circunstancia para obtener un resultado, como, por ejemplo, en el caso que nos convocan, de no haber intentado cruzar la vía en ese momento tampoco se hubiera causado el hecho. Debido a esta circunstancia, la jurisprudencia abandonó este análisis meramente fenomenológico conocido como conditio sine qua non y acudió al concepto jurídico de CAUSALIDAD ADECUADA, en virtud del cual, no basta verificar fenomenológicamente que un evento es consecuencia de un hecho, sino que, debe realizarse un juicio lógico y un análisis detallado de los hechos, para determinar a cuál de las posibles causas fácticas, se debe atribuir en realidad el daño ocasionado.

Al respecto, sostuvo la Sala de Casación de la Corte Suprema de Justicia que:

«Sobre el particular es menester manifestar que, ciertamente, la teoría de la «equivalencia de condiciones», propia de un análisis naturalístico, sirvió de origen y fundamentación a la noción de vínculo causal, a través de la utilización de las categorías de causa y efecto de las ciencias naturales. Sin embargo, esta visión no siempre permite individualizar el hecho que, en concreto, produjo el resultado, pues la revisión causal puede conducir a una cadena infinita de fuentes y diluir la responsabilidad»”(fl 4 ibídem)

Además, alegó que el *a-quo* había dado por probados los motivos por los cuales supuestamente se detuvo el vehículo de placas VLI, pues así procedió con base en el dicho de una de las demandantes que no está respaldado por prueba adicional alguna. Al respecto agregó:

"en el proceso no se logró probar que la víctima hubiese sido obligada a descender del vehículo y cruzar la vía. En cambio, la demandante EMILIA JIMENEZ confesó en el interrogatorio de parte que el señor Pedro José

descendió voluntariamente y bajo su propio riesgo. Esto implicó que el transportista no tuviera el control de lo que la víctima hiciera luego de que saliera del vehículo, lo cual fue omitido en la sentencia de primera instancia al no reconocer la excepción de causa extraña. Estando más que claro que la conducta de la víctima constituyó una negligencia pues contravino el deber de cuidado que exige de los peatones el Código Nacional de Tránsito, además que constituye una afrenta en contra de los artículos 57 y 581 del mismo cuerpo normativo.

En consecuencia, al realizar un análisis del accidente es evidente que la conducta de la víctima fue la causa determinante y eficiente del daño sufrido, pues de haber cruzado la vía por el lugar especialmente diseñado para tales fines o con la precaución debida, el conductor del vehículo de SOTRAURABA no le hubiera arrojado” (fl 5 ibídem).

Sostuvo, además, que la víctima fue declarada contravencionalmente responsable por lo que, en cualquier caso, mínimamente debe aplicarse una reducción de la indemnización superior al aplicado por el Juez, amén de tener en cuenta el pago parcial de \$32.000.000 realizado por SBS Seguros Colombia, sin que proceda tampoco la indexación de los salarios en tanto que los perjuicios deben pagarse, si es del caso, con base en el SMLMV para el año 2017.

Los no apelantes, por su parte, guardaron silencio.

PROBLEMAS JURÍDICOS

De acuerdo con lo decidido y argumentado por el juzgador de Primer Grado, y teniendo en cuenta los reproches de la parte apelante, de la siguiente manera puede plantearse el problema jurídico que debe abordar la Sala en esta ocasión:

¿En realidad se acreditó la ruptura del nexo causal por el hecho exclusivo de la víctima y/o el hecho exclusivo de un tercero, como lo estima la parte apelante? o, por el contrario, como lo concluyó el juzgador de primer grado, ¿están acreditados todos los presupuestos

axiológicos de la pretensión de responsabilidad civil extracontractual para condenar a la parte demandada?

Dependiendo de la respuesta a los anteriores interrogantes, deberá la Sala resolver:

¿Debe reducirse aún más la indemnización por haber aportado la víctima en la ocurrencia del accidente?

¿Debe liquidarse una eventual condena con base en el salario mínimo del año 2017?

¿Debe descontarse suma alguna a la condena que debe pagar la apelante?

CONSIDERACIONES

1. De la responsabilidad en el ejercicio de actividades peligrosas

Para que se verifique la responsabilidad patrimonial, se requiere que el daño se genere como consecuencia de la acción u omisión del demandado, es decir, que exista vínculo de causalidad (modernamente imputación) entre la conducta humana y el daño. En cuanto al elemento subjetivo o psicológico de la conducta, la necesidad de su valoración se impone en los regímenes subjetivos de responsabilidad, los cuales constituyen, en el ordenamiento jurídico colombiano – de marcada tendencia culpabilista –, la regla general (artículo 2341 del Código Civil).

No obstante, hay eventos excepcionales en que resulta posible prescindir del análisis sobre el carácter culposo del autor, en los cuales se encuentran las situaciones en que en la causación del perjuicio, por ejemplo, aparecen involucrados objetos inanimados empleados en el ejercicio de actividades peligrosas (artículo 2356 del Código Civil). En estos casos, la categoría de la culpabilidad es completamente irrelevante para la determinación de la responsabilidad, razón por la cual la única vía posible de exoneración consiste en la acreditación de una causa extraña, en cualquiera de sus tres modalidades: caso fortuito o fuerza mayor, hecho exclusivo de la víctima,

hecho exclusivo de un tercero. Al respecto, se ha pronunciado la Corte Suprema de Justicia en los siguientes términos:¹

"...a la vera de la responsabilidad civil disciplinada en las normas generales, coexisten regímenes singulares para determinadas categorías, dentro de éstas las atañederas al ejercicio de actividades peligrosas que implican riesgos de tal naturaleza que hacen inminente la ocurrencia de daños...considerada su aptitud de provocar un desequilibrio o alteración en las fuerzas que –de ordinario- despliega una persona respecto de otra, su apreciable, intrínseca y objetiva posibilidad de causar un daño" y, por consiguiente, su idoneidad potencial para lesionar los derechos e intereses tutelados por el ordenamiento jurídico, más allá de la diligencia o cuidado exigible y de los parámetros corrientes.

Trátase de actividades dañosas o riesgosas que no se prohíben, por cuya peligrosidad intrínseca o relativa a los medios de trabajo empleados, es decir por los riesgos y peligros que las caracteriza per se disciplina el deber legal de resarcir los daños causados.

Por esta inteligencia, tiene dicho la Corte, los únicos elementos estructurales de esta especie de responsabilidad son el ejercicio de una actividad peligrosa, la causación de un daño y la relación de causalidad entre aquélla y éste, exigiendo tan sólo que el daño pueda imputarse [...] por los peligros que implican, inevitablemente anexos a ellas, sin requerir la prueba de la culpa para que surja la obligación de resarcir,... y por ello basta la demostración del daño y el vínculo de causalidad...

La víctima, sólo debe probar el daño y la relación de causalidad con la actividad peligrosa y al autor o agente no le basta probar ausencia de culpa, ni diligencia o cuidado, siéndole menester acreditar plenamente el elemento extraño como causa exclusiva del daño, esto es, la fuerza mayor o caso fortuito, la intervención de la víctima o de un tercero...".

¹ Sala de Casación Civil, sentencia de 18 de septiembre de 2009, Exp. 20001-3103-005-2005-00406-01, M.P. William Namén Vargas.

De manera que el régimen de responsabilidad por actividades peligrosas está sujeto a lineamientos particulares:

“en su etiología, ratio y fundamento. Por su virtud, el fundamento y criterio de imputación de la responsabilidad es el riesgo que el ejercicio de una actividad peligrosa comporta por el peligro potencial e inminente de causar un daño a los bienes e intereses tutelados por el ordenamiento. La culpa no es elemento necesario para estructurar la responsabilidad por actividades peligrosas ni para su exoneración; no es menester su demostración, ni tampoco se presume; el damnificado tiene la carga probatoria exclusivamente de la actividad peligrosa, el daño y la relación de causalidad; y, el autor de la lesión, la del elemento extraño, o sea, la fuerza mayor o caso fortuito, la participación de un tercero o de la víctima que al actuar como causa única o exclusiva del quebranto, desde luego, rompe el nexo causal y determina que no le es causalmente atribuible, esto es, que no es autor. En contraste, siendo causa concurrente, pervive el deber jurídico de reparar en la medida de su contribución al daño”².

Ahora bien, el contenido del artículo 2356 del Código Civil es de carácter meramente enunciativo en cuanto a actividades que comportan peligro. No obstante lo anterior, la Corte Suprema de Justicia ha catalogado ciertas actividades como peligrosas, tales como la distribución de energía eléctrica, la conducción de automotores, el manejo de materiales explosivos, la construcción, entre otras.³ Teniendo en cuenta, naturalmente que con referencia a tales comportamientos o actividades es propio aplicar el régimen de responsabilidad objetiva cuyo factor de imputación es el riesgo.

2. De la causa extraña. Hecho exclusivo de la víctima, hecho exclusivo de un tercero

² Corte Suprema de Justicia, Sala Civil. Sentencia del veinticuatro (24) de agosto de dos mil nueve (2009), Expediente 11001-3103-038-2001-01054-01, M.P. William Namen Vargas.

³ Ibíd.

La causa extraña como género se compone de hechos o situaciones imprevisibles, irresistibles y exteriores al demandado, a partir de los cuales ninguna responsabilidad puede imputársele. En ese sentido, si bien la causa extraña tiene varias especies (hecho de la víctima, de un tercero, entre otros), lo cierto es que la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia ha sido clara en estructurar el fondo principalístico que debe observarse dentro de cualquiera de sus vertientes. Por ello, se ha considerado que la definición de causa extraña, en general, deviene del concepto de caso fortuito o fuerza mayor, pues:

*"cumple reiterar...- por la inescindible relación que tiene con el asunto que ocupa la atención de la Corte - que en el Derecho Colombiano los dos presupuestos - ex lege - que estereotipan, como unidad conceptual y como sinonimia legal, al caso fortuito o fuerza mayor, son la **imprevisibilidad** y la **irresistibilidad** (...), en donde brilla por su ausencia un precepto definitorio del fenómeno liberatorio en cuestión, a la par que con el criterio adoptado por esta Corporación, respetuoso de la ley positiva que, se insiste, efectúa la supraíndicada caracterización..."*⁴

Ahora bien, de manera concreta habrá lugar a considerar la causa extraña cuando se presenta un hecho imprevisible e irresistible, pero teniendo claro que *"deben estar presentes coetánea o concomitantemente, para la concreción de este instituto jurídico exonerativo de responsabilidad, tal y como ha sido señalado en reiterada jurisprudencia de la Corporación (Sentencias del 26 de julio de 1995 expediente 4785; 19 de julio de 1996 expediente 4469; 9 de octubre de 1998 expediente 4895, entre otras), **de forma que si se verifica uno de ellos, pero no los dos, no será posible concederle eficacia alguna, ya que esta es bipolar**"*⁵ (negrillas del Despacho)

Además, algún sector de autorizada doctrina ha considerado que se hace necesaria la exterioridad del hecho alegado como casusa extraña, pues que

⁴ Corte Suprema de Justicia. Sala Civil. Sentencia del 23 de junio de 2000. Expediente 5475. M.P. Carlos Ignacio Jaramillo.

⁵ Ibíd.

se trata, como se dijo, de “un hecho **extraño** al deudor... vale decir que el deudor no haya contribuido a producir...” y que sea **imprevisible e irresistible**⁶.

De suerte que es posible calificar un hecho como imprevisible para el demandado en uso de criterios claros como: “1) *El referente a su normalidad y frecuencia*; 2) *El atinente a la probabilidad de su realización*, y 3) *El concerniente a su carácter inopinado, excepcional y sorpresivo*” (Ospina *ibíd*)

Superado entonces el primer polo del concepto, deberá el juzgador estar atento a que, dentro de la prueba sobre los hechos alegados por el demandado, obre con gran significación la irresistibilidad, en estudio de la cual debe tenerse en cuenta que “*en el lenguaje jurídico, la irresistibilidad debe entenderse como aquel estado predicable del sujeto respectivo que entraña **la imposibilidad objetiva de evitar ciertos efectos o consecuencias derivados de la materialización de hechos exógenos** - y por ello a él ajenos, así como extraños en el plano jurídico - que le impiden efectuar determinada actuación, lato sensu...*”⁷. (negrillas del Despacho).

Es más, esa tarea debe emprenderse sin perder de vista que un “*hecho sólo puede ser calificado como irresistible, si es absolutamente imposible evitar sus consecuencias, es decir, que situada cualquier persona en las circunstancias que enfrenta el deudor, invariablemente se vería sometido a esos efectos perturbadores, pues la incidencia de estos no está determinada, propiamente, por las condiciones especiales –o personales- del individuo llamado a afrontarlos.*”⁸

En concreto, con respecto al hecho exclusivo de la víctima como arista específica de la causa extraña, es claro que deberá cumplir con los elementos esenciales ya referenciados, dada la trascendental importancia de probar estructuralmente el hecho que da lugar a la liberación de responsabilidad.

⁶ Ospina Fernández, Guillermo. Régimen general de las obligaciones. Bogotá D.C: Editorial Temis Edición de 1994. p. 109

⁷ Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia del 23 de junio de 2000. Expediente 5475. M.P. Carlos Ignacio Jaramillo.

⁸ Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia del 26 de julio de 2005..Expediente 6569. M.P. Carlos Ignacio Jaramillo.

Al respecto ha dicho la Corte

se puede señalar que en ocasiones el hecho o la conducta de quien ha sufrido el daño pueden ser, en todo o en parte, la causa del perjuicio que ésta haya sufrido. En el primer supuesto –conducta del perjudicado como causa exclusiva del daño-, su proceder desvirtuará, correlativamente, el nexo causal entre el comportamiento del presunto ofensor y el daño inferido, dando lugar a que se exonere por completo al demandado del deber de reparación.

"La importancia de la conducta de la víctima en la determinación de la reparación de los daños que ésta ha sufrido no es nueva, pues ya desde el derecho romano se aplicaba en forma drástica la regla, atribuida a Pomponio, según la cual (...) el daño que una persona sufre por su culpa se entiende como si no lo hubiera padecido, lo que condujo a un riguroso criterio consistente en que si la víctima había participado en la producción del daño, así su incidencia fuera de baja magnitud, en todo caso quedaba privada de reclamación.

(...)

"[...] Preciso lo anterior, se debe mencionar que la doctrina es pacífica en señalar que para que el comportamiento del perjudicado tenga influencia en la determinación de la obligación reparatoria, es indispensable que tal conducta incida causalmente en la producción del daño y que dicho comportamiento no sea imputable al propio demandado en cuanto que él haya provocado esa reacción en la víctima. Sobre lo que existe un mayor debate doctrinal es si se requiere que la conducta del perjudicado sea constitutiva de culpa, en sentido estricto, o si lo que se exige es el simple aporte causal de su actuación, independientemente de que se pueda realizar un juicio de reproche sobre ella. (...).⁹

Por otro lado, sobre el hecho exclusivo de un tercero, que naturalmente se sirve de las mismas bases teóricas, la Sala debe decir que para el demandado

⁹ Casación Civil del 16 de diciembre de 2010, exp. 1989-00042-01 reiterada en Casación del 7 de marzo de 2019 Rad. 05001 31 03 016 2009-00005-01. M.P. Octavio Augusto Tejeiro Duque

este deberá aparecer como absolutamente extraño, la ajenidad será de necesaria constatación no sólo respecto de la conducta o actividad suya, sino también respecto del ámbito global de actividad en la que se enmarca su conducta, es decir, no será permitido que en el fondo obre una relación entre el demandado y el tercero al que se le atribuye la derivación del daño¹⁰.

Por valioso ha de extractarse que la Corte Suprema de Justicia¹¹, considera que la exoneración por esta precisa causal supone:

"(...) a) Debe tratarse antes que nada del hecho de una persona por cuyo obrar no sea responsable reflejo el agente presunto, vale decir que dicho obrar sea completamente externo a la esfera jurídica de este último;

b) También es requisito indispensable que el hecho fuente del perjuicio no haya podido ser previsto o evitado por el demandado, ya que si era evitable y no se tomaron, por imprudencia o descuido, las medidas convenientes para evitar el riesgo de su ocurrencia, la imputabilidad a ese demandado es indiscutible, lo que en otros términos quiere significar que cuando alguien, por ejemplo, es convocado para que comparezca a juicio en estado de culpabilidad presunta por el ejercicio de una actividad peligrosa, y dentro de ese contexto logra acreditar que en la producción del daño tuvo injerencia causal un elemento extraño puesto de manifiesto en la conducta de un tercero, no hay exoneración posible mientras no suministre prueba concluyente de ausencia de culpa de su parte en el manejo de la actividad;

c) Por último, el hecho del tercero tiene que ser causa exclusiva del daño, aspecto obvio acerca del cual no es necesario recabar de nuevo sino para indicar, tan sólo, que es únicamente cuando media este supuesto que corresponde poner por entero el resarcimiento a la cuenta del tercero y no del ofensor presunto, habida consideración que si por fuerza de los hechos la culpa de los dos ha de catalogarse como concurrente y por lo tanto, frente a la víctima, lo que en verdad hay son varios coautores que

¹⁰ Reglero Campos, L. Fernando. Tratado de la Responsabilidad Civil. T I. p. 358.

¹¹ Sentencia de Casación Civil del 7 de marzo de 2019. Rad. 05001 31 03 016 2009-00005-01. M.P. Octavio Augusto Tejeiro Duque

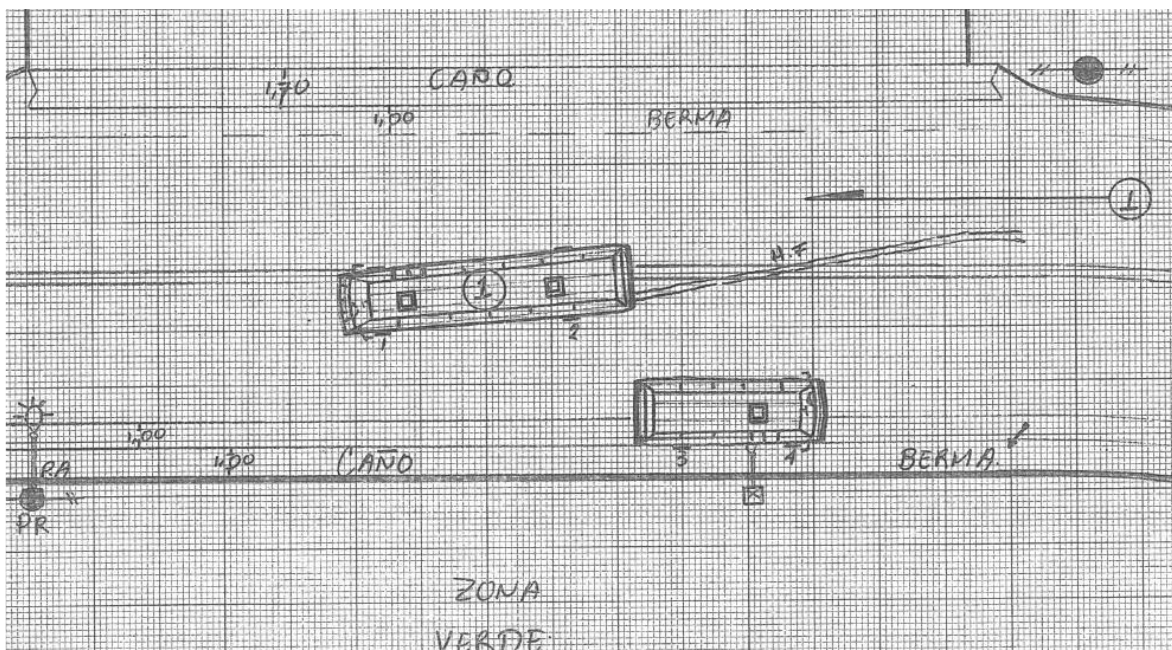
a ella le son extraños, esos coautores, por lo común, están obligados a cubrir la indemnización en concepto de deudores solidarios que por mandato de la ley lo son de la totalidad de su importe, postulado éste consagrado por el artículo 2344 del Código Civil”.

CASO CONCRETO PRIMER REPARO

La Sala debe comenzar por la presente inconformidad porque más allá de ser la primera que la apelante enarboló en contra de la sentencia de primer grado, de su solución depende la suerte de la recurrencia en lo restante, tanto como que se está cuestionando que el Juez no hubiera dado por probado el hecho exclusivo de la víctima y/o de un tercero, como causas que por separado o en conjunto explican la ocurrencia del resultado dañoso.

Pues bien, sea lo primero advertir que ninguna discusión suscitó entre las partes que el accidente de tránsito origen de este litigio ocurrió el 22 de enero de 2017, cuando el señor Pedro José Holguín Durango (QEPD), de 78 años, se desplazaba como pasajero en el vehículo tipo bus de transporte público identificado con las placas VLI 089, afiliado a COOTRAUR y conducido por el señor Robinson Alonso Ramírez Jiménez, el cual cubría la ruta Medellín – San Jerónimo. La cadena causal más próxima al evento dañoso tampoco se discutió, por lo menos en lo general, pues quedó claro que el conductor del rodante TRM 672 atropelló al señor Holguín a la altura del “Estadero Rancho Grande”, justo cuando este intentó cruzar la calzada destinada para el tránsito de vehículos.

Lo que alguna diferencia causó entre la apelante y los demandantes fue la ubicación del vehículo VLI 089, momentos previos al accidente. Lo anterior, porque los actores denunciaron que se encontraba en la “mitad de la vía”, mientras que la aseguradora adujo que su ubicación era lo más próximo posible a la berma. Al respecto, la Sala debe tomar postura por la segunda de las apreciaciones, porque eso es precisamente lo que indica el IPAT levantado por la autoridad de tránsito, en el que con el número 1 se marca el vehículo TRM 672 y al conducido por el señor Robinson Alonso Ramírez se le llama “otro vehículo” (fls 33-34 pdf 02):



Así las cosas, la prueba desdice de la afirmación sostenida en la demanda en punto a que el conductor del vehículo VLI *"de manera imprudente detuvo el vehículo en zona prohibida en mitad de la vía pública"* (sic hecho primero demanda fl 6 pdf 02). Tampoco quedaron probados los motivos que según el *a-quo* llevaron a que el señor Holguín descendiera del vehículo en el que transitaba como pasajero, pues el *a-quo* sostuvo que se trató de una parada obligatoria en la que fue compelido a descender del rodante, debido a que usualmente en el "Estadero Rancho Alegre" todos los pasajeros debían entrar para buscar hidratación y, en fin, satisfacer las necesidades de todo viajero.

Ello no está probado porque el Juez lo concluyó con base en la declaración de la cónyuge sobreviviente, aquí demandante. Luego, bien sabido es que la parte no puede fabricar su propia prueba y resulta un error asumir, sin más, como cierto todo lo declarado en el interrogatorio de las partes, salvo que se trate de una confesión con el lleno de los requisitos preceptuados en el artículo 191 del C.G.P. De modo que sólo se sabe que el señor Holguín descendió del vehículo VLI y, justo cuando trató de cruzar la calzada destinada para el tránsito de vehículos, fue atropellado por quien pilotaba el vehículo TRM.

Ahora bien, la razón por la cual el Juez entendió que a la transportadora demandada debe imputarse responsabilidad está contenida en el numeral segundo del artículo 982 del Código de Comercio, según el cual, en lo pertinente *"(E)l transportador estará obligado (...) 2) En el transporte de personas a conducirlos sanas y salvos al lugar de destino"*. Aseguró entonces el Juzgador, como evidentemente sucedió, que el conductor del vehículo

afiliado a la empresa Cootraur no llevó al señor Holguín, sano y salvo, a su lugar de destino. En muchos eventos eso sería suficiente para que el transportador esté obligado a asumir las consecuencias del hecho dañoso, si no fuera porque la causa extraña obviamente también aplica en estos casos.

En concreto, para la Sala entre las causas determinantes del accidente no se encuentra ninguna atribuible a los demandados que aún están comprometidos en este proceso, porque el sólo hecho de haber detenido el vehículo VLI en la vía pública, por cualquier razón que ello ocurriera, no fue lo que causó el accidente. En realidad, el suceso fatal ocurrió por causas atribuibles a la propia víctima y, si se quiere, al conductor del vehículo TRM en el marco de unas circunstancias que si bien fueron objeto de conciliación, permiten para efectos de este recurso llegar a la conclusión que acaba de expresarse, según las razones que enseguida se ofrecen.

Nótese que a folios 334 y siguientes del pdf 02 obra el dictamen pericial rendido por IRS vial, el cual fue presentado por la apelante y no mereció reparo alguno por parte de los demandantes, pues ni siquiera solicitaron la comparecencia del perito. En ese trabajo pericial, después de realizar un resaltable trabajo de reconstrucción física y mecánica del accidente, se concluyó que *"la causa fundamental (determinante) del accidente de tránsito obedece al no tomar por parte del peatón, las medidas de precaución necesarias para realizar el cruce de la calzada"* (fl 455 *ibídem*), aunque el experto no negó que el conductor TRM pudo estar desplazando a una velocidad oscilante entre 72 y 82 kms/h, en todo caso probablemente dentro de la permitida en esa vía, aunque ligeramente ajustada a la consagrada en las normas de tránsito.

Del estudio de ese mismo experticio, en conjunto con el informe de tránsito, se concluye que el señor Pedro José fue atropellado a medio camino de la calzada contraria a la que estaba estacionado el VLI, lo que indica que alcanzó a recorrer gran parte del camino que lo llevaba a "Rancho Grande", pero desafortunadamente intentó recorrer ese trayecto ejecutando una maniobra mal calculada y se encontró con que el conductor del TRM, como se dijo, no pudo evitar el impacto. De modo que el suceso ocurrió porque *"el tiempo (2,7 y 3,9 s) que le toma al peatón hasta el atropello es mayor que el tiempo de reacción del conductor (1,5 y 2,0), es decir, el conductor tendría tiempo para*

divisar al peatón y realizar alguna maniobra (frenada de emergencia y/o maniobrar hacia un lado), como en efecto sucedió”(fl 445)

Así lo concluyó el perito después de colegir que con alguna certeza la velocidad del TRM era apenas la aceptable, por lo que a pesar de ciertas maniobras evitativas no pudo sortear el impase ante una persona que cruzó la calzada sin tomar medidas para lograr una maniobra exitosa, como lo describió el agente que suscribió el IPAT en la hipótesis después de atender los actos urgentes posteriores al hecho (fl 452 *ibídem*), considerando naturalmente que el impacto con el peatón ocurrió en medio de la vía en la que, en principio, tenían prelación los vehículos.

Por su parte, los demandantes aportaron un dictamen suscrito por un físico-matemático que, desafortunadamente, falleció antes de que pudiera comparecer para efectos de sustentación, pero que dicho sea de paso acompaña las conclusiones con base en las cuales se imputa gran parte de la responsabilidad al conductor del TRM, amén de las que acoge la Sala analizando el protocolo de necropsia (fl 27 pdf 2) y la corta historia clínica aportada, pues allí se describe que el señor Holguín sufrió fuertes y graves lesiones traumáticas causadas por un objeto contundente, al punto que al Hospital Pablo Tobón Uribe de esta ciudad ingresó sin signos vitales.

Lo dicho, y las fotos que obran a folio 137 del pdf 02 permiten concluir que el peatón fue atropellado de forma violenta y a una velocidad considerable, porque si bien un accidente tránsito de estas características suele ocasionar lesiones de consideración, lo cierto es que la experiencia muestra a la velocidad como un factor de agravación, debido a lo cual desde la propia demanda se imputó responsabilidad al conductor TRM por *"la alta velocidad y el exceso de confianza"* (hecho 3.4 demanda fl 5 *ibídem*). Es decir, desde el libelo mismo se afirmó que la velocidad excesiva del TRM fue la causante el accidente, mientras que al conductor del VLI únicamente se le acusó de haber estacionado su vehículo en el lado contrario de la calzada.

De suerte que detener un vehículo en el carril contrario al que se ubica el comercio en el que se esperaba que los pasajeros suplieran sus necesidades, sin duda, es una conducta que desde el punto de vista contravencional podría reprocharse, más claramente es una manifestación física que en efecto estuvo

presente en la cadena causal previa al accidente. Empero, ninguno de esos juicios, contravencional y causal, suple *per se* los requisitos que debe reunir la imputación jurídica de resultados que impera en materia de responsabilidad civil. Al respecto, vale recordar que esta Sala ha considerado el sinnúmero de variaciones que pueden presentarse alrededor de un accidente de tránsito, lo cual impide *ab-initio* concluir tajantemente que por el hecho de uno de los partícipes en el accidente violar una norma de tránsito, necesariamente esto sea una conducta que va a implicar para él un grado cualquiera de corresponsabilidad en el mismo.

Tal sucede por ejemplo cuando un automotor conducido a una velocidad normal y por vía preferente, es colisionado por otro que no respeta esta última circunstancia; en este caso, ni siquiera el hecho de ir el primero de los conductores alicorado, eximiría de responsabilidad al imprudente que lo envistió, máximo aquél se haría acreedor a una sanción contravencional, pero en manera alguna podría considerársele civilmente responsable en la ocurrencia del choque.

Es que causa determinante de un hecho es aquella que de no haberse presentado, el mismo no hubiera tenido lugar, y es lo cierto que aún de suprimirse ese estado de alicoramiento, el choque se hubiera presentado precisamente porque su causa determinante no fue este sino la conducta de quien a pesar de encontrarse en sano juicio, no respetó la prelación vial del primero. De modo que es suprimiendo la conducta violatoria de la prelación, que el choque no hubiera ocurrido¹².

Para ser más específicos, la ubicación final del vehículo VLI no fue la causa determinante del accidente, pues si bien el señor Pedro llegó hasta el sitio donde perdió a la vida a bordo de ese rodante, no fue su estacionamiento, ni ninguna otra acción-omisión de su conductor, lo que desencadenó su muerte violenta, como que en realidad esta ocurrió por su propia imprudencia sumada, si se quiere, a la del conductor TRM, pero en cualquier caso por asuntos no imputables a los demás demandados.

¹² Tomado de sentencia del 26 de enero de 2017. Rad. 05001 31 03 014 2014-01311 00, con ponencia de la suscrita.

Son así las cosas, porque el régimen de imputación jurídica (nexo causal) impone averiguar la causa determinante del accidente, sin caer en las simples reglas de causa-efecto en las que las cadenas causales son infinitas, tanto como que habría que imputar responsabilidad a cualquiera que tuviera la más mínima conexión con el suceso. Ergo, está claro que físicamente el conductor VLI participó en los hechos en la medida que era el transportador encargado de llevar de un punto a otro a la víctima, pero jurídicamente el resultado no le es imputable y, por ende, a juicio de la Sala, en la sentencia apelada se confundió la causalidad natural con la imputación jurídica de resultados.

La sentencia, por tanto, será revocada para en su lugar negar las pretensiones de la demanda en contra de los demandados que siguen comprometidos en la causa, se insiste, porque la explicación de la trágica muerte que aquí convoca la atención se encuentra en la conducta de la víctima misma, aunada a la participación de un tercero cuyo grado ahora no importa porque, de cualquier manera, no toca con atribución alguna en contra de los demandados bajo mención. Por tanto, naturalmente, no será necesario abordar los demás reparos.

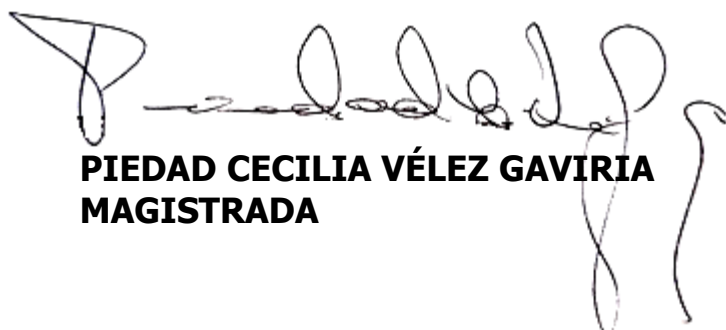
Finalmente, los demandantes serán condenados a pagar las costas de ambas instancias, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 365.4 del C.G.P, pero sólo a favor de Zurich Colombia Seguros S.A por ser la única interviniente que actuó en ambos grados.

DECISIÓN

Sin más consideraciones, la Sala Cuarta de Decisión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, **REVOCA** la sentencia de procedencia y fecha indicadas, para en su lugar **NEGAR** las pretensiones en contra de Zurich Colombia Seguros S.A (antes QBE Seguros S.A), Cooperativa Multiactiva de Transportes de Urrao -COOTRAUR- y Robinson Alonso Ramírez Jiménez, por las razones ofrecidas en la parte motiva de esta sentencia. **Costas** en ambas instancias a cargo de los demandantes y a favor únicamente de Zurich Colombia Seguros S.A.

Ejecutoriada esta sentencia, el expediente ingresará a Despacho para fijar las agencias en derecho que correspondan.

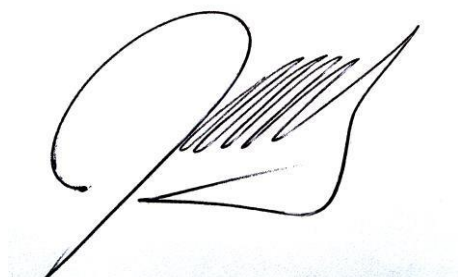
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



PIEDAD CECILIA VÉLEZ GAVIRIA
MAGISTRADA



JUAN CARLOS SOSA LONDOÑO
MAGISTRADO



JULIÁN VALENCIA CASTAÑO
MAGISTRADO

Firmas son de la siguiente causa:

S - 31

Procedimiento: Verbal

Demandante: Emilia Jiménez Durango y/o

Demandados: Cootraur y/o

Radicado Único Nacional: 05001 31 03 008 2019 00158 01

Procedencia: Juzgado Octavo Civil del Circuito de Oralidad de Medellín

Decisión: Revoca providencia apelada